



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 018 2022 00074 02

Demandante: ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S..
Demandados: INVERSIONES EL MARQUÉZ S.A.S. y ANUAR OSWALDO OYOLA MARQUÉZ.
Extracto: 1. En materia probatoria se deben adoptar las medidas necesarias para verificar los hechos alegados por las partes. 2. De la prueba sobreviniente aplicada en procesal civil. Revoca.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto calendado el siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2.022), corregido el veinte (20) de febrero hogaño, proferido por el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

Mediante la providencia recurrida se convocó para la realización de la audiencia inicial, además que se dispuso el decreto de pruebas, siendo respecto a lo probatorio que la parte demandada interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, argumentando:

- 1- Se omitió pronunciamiento sobre la declaración de LUZ MARYORI VALENCIA QUINTERO, solicitado en la contestación a la demanda, así como en el llamamiento en garantía.
- 2- Que el llamamiento en garantía fue respecto a VL CONSULTORES JURÍDICOS S.A.S., y no frente a ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., lo que debe precisarse de cara al interrogatorio de parte decretado.
- 3- En cuanto a la “*prueba sobreviniente*”, referente a las respuestas que brindara el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a dos derechos petición, calendadas el 24 de agosto y 26 de octubre, ambas de 2.022, se trata de documentos conseguidos con posterioridad a la oportunidad del decreto de pruebas.

El *a quo* en auto del 20 de febrero de 2.023, respecto a lo primero indicó que no hubo tal omisión, explicando que en el decreto de pruebas sí quedó el interrogatorio de VALENCIA QUINTERO, quien es la representante legal suplente de INVERSIONES EL MARQUÉZ S.A.S.; en relación a lo segundo, corrigió su decisión según lo pedido.

Ese mismo día pero en providencia separada, no se repuso lo referente a la “*prueba sobreviniente*”, entendida esta como un medio probatorio excepcional, pero que no se trata de un hecho imprevisible o cuya existencia se desconocía al momento de contestar la demanda, y como no hubo anuncio de ello en la correspondiente réplica, se trata de documentos extemporáneos¹.

Subsidiariamente concedió la alzada, la que se resuelve previas:

¹ Archivos 51, 54, 57, 60 y 61 del cuaderno principal.

CONSIDERACIONES

Precisión liminar:

El 17 de marzo de 2.023 y en curso de esta apelación, llegó al Tribunal escrito por con el cual el apoderado de la parte demandada informaba que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA, mediante auto del 6 de marzo de 2.023, admitió a INVERSIONES EL MARQUÉZ S.A.S. en el proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2.006; sin embargo, como no estamos frente a proceso ejecutivo u otro de cobro, en atención al artículo 20 de tal Ley, seguimos con el estudio de la alzada.

De la apelación y la oportunidad para las probanzas:

Conforme los artículos 320 y 328 del C. G. del P., el recurso de apelación tiene por objeto que se examine la cuestión decidida en primera instancia, con el fin de revocarla o reformarla únicamente en relación a los reparos concretos planteados por el recurrente, donde en lo que nos ocupa la parte demandada presentó varios puntos de inconformidad respecto al decreto de pruebas, pero nos circunscribimos a lo negado, esto es, la documental denominada “*pruebas sobrevinientes*”.

El artículo 164 ídem establece; “*Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.*”. La prueba verifica o confirma los supuestos de hecho expresados para el proceso, por lo que cada parte puede aportar cualquiera que sea útil para convicción del Juez (art. 165 procesal civil), en cuanto a su valor, no lo indica una norma, sino, es el que racionalmente se le atribuya según el artículo 176 ídem, respetando las garantías constitucionales.

Sobre la oportunidad para incorporar probanzas (art. 173 del C. G. del P.) se considera que el demandante lo hará en su demanda o en el término para solicitar las adicionales (arts. 82.6 y 370 ídem); por su parte, el demandado puede hacerlo en su contestación y al proponer excepciones (art. 96 de igual estatuto procesal).

En el caso en estudio, el 17 de junio pasado la parte demandada contestó y propuso excepciones de mérito; posteriormente, el 10 de noviembre de ese año, la misma arrimó documentos a los que llamó “*pruebas sobrevinientes*”, consistentes en las respuestas a dos derechos de petición que le hiciera al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, las que datan del 24 de agosto y 26 de octubre, de 2.022.

Para la Sala, la decisión cuestionada en principio tiene adecuado fundamento legal, pues no hay discusión en cuanto a que esta última prueba se adjuntó cuando había fenecido la oportunidad procesal probatoria, también siendo cierto que la parte demandada dejó de anunciar sobre la presentación de los derechos de petición, ya que de ello no quedó constancia en la contestación o en otros escritos.

De la “*prueba sobreviniente*” y la solución al caso:

Indicó el recurrente que las respuestas allegadas y dimanadas del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, son documentos conseguidos luego de la oportunidad para aportar probanzas, razón por la cual no había lugar a su incorporación en el correspondiente momento, y menos, informar sobre el particular.

Sobre el punto, debe precisarse que el Estatuto Procesal Civil no refiere a la prueba “*sobreviniente*” como tal; sin embargo, de cara al recurso extraordinario de revisión, en la causal 1ª (artículo 355),

encontramos el siguiente supuesto normativo y que da pie a invalidar la sentencia revisada, tal como es: *“Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”*.

Entonces, el asunto no es de poca monta, en la medida, que incluso después de haberse definido de fondo del asunto, al hallarse documentos, no solo desconocidos en ese momento, sino que no se pudieron incorporar al trámite bien sea por *“fuerza mayor o caso fortuito”* u *“obra de la parte contraria”*, hacen que pueda decaer todo un trámite procesal.

Sin embargo, en las presentes no nos encontramos frente a la sentencia, mucho menos en el trámite de tal recurso extraordinario, sino, apenas en relación al auto que ha abierto el proceso a pruebas, por lo que para resolver el asunto y tal como nos lo autorizan los artículos 11 y 12 del C. de P. C., de cara a la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y derecho de defensa, observaremos normas que regulen casos análogos.

En materia penal, el último inciso del artículo 344 del correspondiente Código de Procedimiento, indica:

“... si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.”.

Valga recalcar que no se trata de habilitar otro período probatorio para remediar omisiones de las partes, sino, es la temporalidad del hallazgo

y la trascendencia la que determina que sea sobreviniente. De esas situaciones la jurisprudencia penal se ha pronunciado así:

“Obsérvese cómo, el trámite de descubrimiento previo al juicio en las oportunidades indicadas para esto, hace parte del debido proceso probatorio y repercute seriamente en el derecho de defensa, por ello, se reitera, la consecuencia de su inobservancia, no puede ser otra que el rechazo del medio solicitado, salvo los casos de “prueba sobreviniente”, cuyo decreto excepcional en el juicio fue concebido, no para cambiar la forma en la que se preparó la incorporación y práctica de las pruebas decretadas, ni con el fin de revivir oportunidades procesales fenecidas, sino para no privar a las partes de ofrecer el conocimiento contenido en aquel medio que siendo pertinente, conducente y útil, (i) surge en el curso del juicio, bien porque se deriva de otra prueba allí practicada y ello no era previsible, o porque en su desarrollo alguna de estas encuentra un elemento de convicción hasta ese momento desconocido; (ii) no fue descubierto oportunamente por motivo no imputable a la parte interesada en su práctica; (iii) es “muy significativo” o importante por su incidencia en el caso; y, (iv) su admisión no comporta serio perjuicio al derecho de defensa y a la integridad del juicio.

“Respecto de estas exigencias derivadas del inciso final del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, tiene dicho la Sala:

““Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes “encuentre” o se entere sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y atendible.

““No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales (encontradas o derivadas), aquellas que, conociéndose con antelación, o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto en las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la parte interesada en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe. (Subraya no original) (CSJ SP, 30 Mar. 2006, Rad. 24468)”. AEP 129-2022. (13 de octubre) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal –Especial de primera instancia-.

Así las cosas, lo conocido como “prueba sobreviniente” está constituida por los siguientes elementos:

- (i) Surge en el curso del proceso y era desconocido;
- (ii) No se arrimó oportunamente por motivo no imputable a la parte interesada;
- (iii) Es significativo en el pleito; y,
- (iv) Su admisión no comporta un perjuicio a la contradicción y defensa.

En el asunto que nos ocupa, la prueba documental que se quiere sea considerada no se anunció desde la réplica a la demanda, pero ello se explica con que tal contestación fue el 17 de junio 2.022, mientras que los escritos arrimados están calendados los días 24 de agosto y 26 de octubre de ese año. Eh ahí la temporalidad del hallazgo que acredita que se trata de documentos desconocidos, sin que sea posible determinar la previsión aludida por el *a quo*, ya que no quedó establecida la fecha de radicación de los derechos de petición.

Tampoco encuentra la Sala que el medio de prueba dejó de arrimarse por motivo imputable a la demandada, y en cuanto a la importancia de la probanza, nótese que el asunto gira en torno a la acción prevista en el artículo 1.579 C. C., y la prueba que se pretende sea atendida tiene relación con las excepciones propuestas, exactamente con lo que se dice es el negocio jurídico base de la deuda que presuntamente pagó la demandante, de ahí su trascendencia para el proceso.

Ahora, el *a quo* ya venía considerando este tipo situaciones, pues en auto del 20 de febrero de 2.023, respecto a otros documentos, decidió:

“Se incorpora al expediente, información que allega la parte actora respecto del proceso adelantado ante la Superintendencia de Sociedades sobre la Negociación de Emergencia y el Acuerdo de Reorganización de INVERSIONES EL MARQUEZ S.A.S. (Radicado 2022-INS-1146), el cual fracasó y se dio por finalizado (archivo 58 C1 Exp. Digital). Además, se incorpora copia de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Medellín de desestimar el recurso extraordinario de anulación presentado por INVERSIONES EL MARQUEZ S.A.S. contra el laudo Arbitral del 12 de julio de 2022, proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio Aburrá Sur en el proceso con radicado No. A005-2021, que tuvo a esta sociedad como contratante incumplido (archivo 56 C1 Exp Digital).”

“Estas decisiones se valorarán como pruebas sobrevinientes en el momento procesal respectivo.” Subrayado intencional, archivo 59 Cuaderno Principal.

Lo anterior resulta válido, ya que la dirección procesal puede decretar o negar probanzas (art. 168 del C. G. del P), y que la decisión se

fundará en ellas, eso sí, siempre respetando el derecho fundamental a la defensa y contradicción de las partes.

En tales términos, se revocará la decisión apelada. Sin costas pues no se advierte su causación (artículo 365.8 del C. G. del P.).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral OCTAVO (8º) del auto calendado el siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2.022) proferido dentro del referenciado, y en su lugar se tiene como prueba documental los escritos distinguidos como 2022-EE-193604 y 2022-IE-044698, adiados el 24 de agosto y 26 de octubre de 2.022, respectivamente, ambos dimanados del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, respecto a los que garantizará el ejercicio de la defensa y contradicción, de parte de quien en su contra se aducen.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente, vuelva el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo. Sin costas.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO